

Bahía Blanca, 3 de marzo de 2026.

VISTO: El presente expediente N° **FBB 3100/2025/1/CA1**, caratulado: **“Legajo de apelación... en autos: ‘GIRALT, Fernando Esteban p/ Evasión simple tributaria’**”, venido del Juzgado Federal N° 2 de la sede, para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 67/68, contra el auto de procesamiento de fecha 12/04/2025.

El señor Juez de Cámara, Leandro Sergio Picado, dijo:

1ro.) La Jueza de la instancia de grado decretó el procesamiento –sin prisión preventiva– de Fernando Estaban Giralt, en los términos del art. 306; 310 y ccs. del CPPN, como autor *prima facie* responsable del delito de evasión tributaria simple por la suma de \$7.588.402,17 en concepto de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020 y por la suma de \$4.190.848,33 en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal 2020 (períodos fiscales 01/2020 a 12/2020; art. 306 del CPPN y art. 1 de la Ley 27430), no adoptándose ningún criterio restrictivo de la libertad de la que goza (art. 312 CPPN); y, en consecuencia, fijó la suma de \$800.000 en concepto de responsabilidad civil y como garantía de las costas del proceso, que deberá pagar el imputado, en los términos del art. 518, CPPN (f. 65).

2do.) Contra dicha resolución apeló la Defensa Pública Oficial Federal, representada por el Dr. Gabriel Darío Jarque (fs. 67/68).

Se agravio de la falta de concurrencia de requisitos esenciales del tipo penal que pretende aplicarse (art. 1 de la Ley 27430), en tanto no se verifican acciones u omisiones engañosas o maliciosas de ocultamiento que posibiliten la evasión del pago de tributos al fisco nacional.

Consideró que el auto que se impugna no está lo suficientemente fundamentado, ya que se basó únicamente en el soporte probatorio aportado y analizado por el denunciante y, en este

USO OFICIAL



punto, mencionó que la mayor parte de la materia imponible ajustada y la cuantificación del monto evadido surgen de un proceso de determinación de oficio basado en presunciones y cálculos estandarizados, lo cual desvirtúa la aplicación del delito penal.

Asimismo, estimó objetable que la magistrada de grado no haya reparado en la expresa voluntad colaborativa de parte de Giralt –en su declaración indagatoria del 17/7/2025– y que no haya sido considerado que el impedimento para cancelar en su totalidad el tributo reclamado por el fisco fuera consecuencia de hallarse bloqueado para desempeñar la actividad.

Por último, se agravó de que el reproche penal a la conducta del imputado se formalice sobre la base de una figura desajustada a la evolución de los índices inflacionarios y al deterioro de la economía; obstando a la aplicación de principios, derechos y garantías que tienen superior tutela, como el de la ley más benigna.

3ro.) Posteriormente e ingresado el expediente a este Tribunal a fs. 72/73, el Sr. Fiscal General, presentó el informe sustitutivo de la audiencia prevista en el art. 454, CPPN, propiciando que se confirme el auto de procesamiento apelado en todos sus términos (Acs. CFABB N° 72/08, 9/14 y 8/16; y Ac. CSJN N° 4/2020: 3° y 11°).

Por su parte, el defensor oficial del encartado hizo lo propio a fs. 74/76, oportunidad en la que reeditó y desarrolló los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación.

Así, en punto a la figura penal que se le atribuye a la conducta del imputado, criticó la falta de adecuación formal de las variaciones económicas –admitidas desde el propio Estado–, y sostuvo que ello conlleva la necesaria modificación en los mínimos para delitos tributarios (<https://www.iprofesional.com/impuestos/443725-regimen-penal-tributario> los-tributaristas-reclaman-un-ajuste-automaticopor-inflacion); los que –a su criterio–, de haber sido



USO OFICIAL

considerados, habrían llevado a dejar fuera del ámbito penal a la conducta que se persigue.

En tal sentido, resaltó que a la fecha de la presentación del informe el Congreso de la Nación Argentina se encontraba en sesiones extraordinarias, siendo una de las cuestiones a abordar la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad del Régimen Penal Tributario (<https://www.infobae.com/politica/2025/12/15/diputados-convoca-unasesion-para-el-proximo-miercoles-y-trataran-el-presupuesto-2026>); por lo que, a diferencia del análisis realizado en la instancia de grado, entendió que se debió considerar la realidad actual del presupuesto que sustenta el procesamiento, respecto de la presunta evasión de un monto que ahora constituye una afectación distinta – menos lesiva– a la entendida al momento de los hechos, y –por ende– ajena al reproche punitivo.

Por tales razones y toda vez que fueron reconocidos por el propio Estado los índices inflacionarios, consideró un despropósito –y una contradicción– que la justicia no aplicase la realidad de dicho deterioro a los montos que son objetivamente considerados como límite de la criminalización de conductas de supuesta evasión; vulnerándose, además, la regla de mayor benignidad universalmente admitida, por lo que solicitó que se revoque la resolución apelada en los términos propuestos.

4to.) a.- La presente causa tuvo su origen en la denuncia penal efectuada, el 30/4/2025, por Leandro E. Inglera Villa, Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Neuquén -DGI- (en adelante, ARCA), con el patrocinio letrado del Dr. Tomás P. Carnevale, mediante un correo electrónico remitido a la Fiscalía Federal N° 2 local, contra Esteban Fernando Giralt (CUIT N° 20-18487408-4), con domicilio fiscal en Estancia El Cabildo-Parcela 305, Bahía San Blas, Pcia. de Buenos



Aires y legal/real en Rawson N° 526, Piso 2, Dpto. B, ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, quien habría incurrido en el ilícito de evasión tributaria simple, prevista y penada por el art. 1° del Régimen Penal Tributario (art. 279, Ley 27430), al haber evadido el pago al Fisco Nacional de las sumas de \$ 7.588.402,17, en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2020, y de \$ 4.190.848,33 en concepto de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (períodos fiscales 1/2020 a 12/2020).

Dicho contribuyente declaró ante el organismo recaudador realizar las siguientes actividades *“Matanza de animales N.C.P. y procesamiento de su carne, elaboración de subproductos cárnicos N.C.P. y cría de animales y obtención de productos de origen animal, N.C.P.”*, cerrando sus ejercicios fiscales en diciembre de cada año y registrando alta activa en el impuesto a las ganancias personas físicas, aportes seguridad social, sicore-retenciones y percepciones e IBB Convenio Multilateral (cfr. fs. 26/36 y 37).

La maniobra ardida desplegada por la firma denunciada y los montos evadidos surgieron a partir de las tareas de fiscalización realizadas por el organismo recaudador (inspección bajo la órbita de la agente Mariana Preziosa y la supervisión de Gustavo Ferreira, ambos con domicilio laboral en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro) y habría consistido en la presentación de Declaraciones Juradas por el período fiscal 2020 con datos falaces y carentes de sustentos en la realidad, al declarar una base imponible menor a la realmente devengada.

Así, la fiscalización generó la orden de intervención N° 1966065 a efectos de determinar posibles omisiones de ventas por el contribuyente por el período 2020, en base a información obrante en la página web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) relacionada con la faena de ganado bovino correspondiente a dicho ejercicio, en la que constaba que Giralt faenó 1007 cabezas de ganado.



USO OFICIAL

Por tal motivo, se realizaron los cálculos para estimar ventas en función de los DTE-Remitos electrónicos de traslados de animales con destino a faenas obrantes en la base informática del Organismo, el peso promedio de la hacienda en pie (KG VIVOS de las cabezas antes de faenar) y el rinde promedio por cabeza bovina como resultado de la faena (KG carne obtenidos).

Además, la fiscalización seleccionó 21 productores/proveedores a los que circularizó para obtener información; de los cuales 12 incumplieron el requerimiento, y de las 9 respuestas recibidas surgió que en 8 casos se trató de venta de animales al Sr. Giralt y solo 1 de los productores -Sebastián Andrés, Kachuck, CUIT 20-28216825-2- manifestó que no realizó venta de animales al denunciado, sino que los remitió para el servicio de faena que éste provee.

Con respecto a los dichos de este último productor, la fiscalización había podido cotejar que no aportó documentación de respaldo y que en los Remitos electrónicos cárnicos o DTE¹, no se lo había consignado como titular de la mercadería, sino que el titular era el Sr. Giralt.

Los agentes de la ARCA visitaron el establecimiento Estancia El Cabildo, y concluyeron que si bien el Sr. Giralt había manifestado verbalmente que solo realizaba tareas de faena, sus dichos se contradecían con la documentación a la que prestó conformidad en su momento (aceptación del DTE); sumado a que durante el ejercicio 2020 el denunciado había emitido algunas facturas de venta de carne faenada.

Por ello, el organismo recaudador realizó ajustes por ventas omitidas, tanto por venta de carne faenada como por servicios de faena (cfr. fs. 15 y 16 del principal).

¹ El DTE fue específicamente ideado para poder incorporar en éste a todos los contribuyentes que intervienen en la cadena desde la salida del establecimiento del productor hasta el establecimiento faenador/frigorífico, pudiéndose identificar el “dueño de la carne”-titular.



Por otro lado, al inicio de la fiscalización la declaración jurada periodo fiscal 2020 no había sido presentada, lo que recién hizo luego de serle notificada, con un saldo de impuesto a ingresar de \$1,679,43. Posteriormente, la fiscalización procedió a poner a disposición del contribuyente el ajuste proforma en el Impuesto a las Ganancias 2020 en fecha 7/8/2023 en su domicilio electrónico.

El 14/8/2023, el contribuyente manifestó su disconformidad con el ajuste notificado, sin haber aportado ningún tipo de documentación, y tampoco presentó las declaraciones juradas de IVA y Ganancias conforme la pretensión del fisco.

b.- En este marco, se dictaron las Resoluciones Nros. 06/2024 y 07/2024 DV RNEU, notificadas el 14/2/2024, mediante las cuales se corrió vista al contribuyente del proceso administrativo de determinación de oficio conforme las previsiones del artículo 14, concordantes y subsiguientes de la Ley 11683 (Procedimiento Tributario); sin embargo, no realizó descargo alguno.

Como consecuencia de ello, se dictaron las Resoluciones 14/2024 y 15/2024 DV RNEU, notificada el 27/3/2024, mediante las cuales se determinó de oficio la materia imponible devengada por la actividad del contribuyente a lo largo del ejercicio fiscal 2020; las que quedaron firmes y consentidas (cfr. fs. 89 Cuerpo IVA y 254, del principal (fs. 1/25; 26/36 y 37).

c.- El Fiscal Federal comunicó las actuaciones y requirió la instrucción del sumario (fs. 38/39); la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de la sede, delegándose la investigación de los hechos en el Ministerio Público Fiscal (art. 196, CPPN), y luego de realizar medidas de prueba (fs. 43/44), se citó a prestar declaración indagatoria a Fernando Esteban Giralt, quien en ese acto manifestó tomar conocimiento de la deuda con la AFIP y manifestó su voluntad colaborativa (fs. 57/58).



d.- A raíz del pedido del Fiscal Federal, la magistrada de grado dictó su procesamiento sin prisión preventiva en orden al delito de evasión tributaria simple (f. 65); lo que fue apelado por el Defensor Público Oficial del encartado (fs. 67/68), recurso que motivó la intervención de este Tribunal.

5to.) Al respecto cabe señalar que la Ley 27799, conocida como “Ley de Inocencia Fiscal”, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el pasado día 2 de enero del corriente año y, en su artículo 45 dispuso que sus disposiciones entrarán en vigencia el día de su publicación en el citado boletín.

De su lectura, se observa que la norma efectuó importantes modificaciones en el régimen penal tributario previsto en la Ley 27430 (arts. 279 y sgtes.), elevando -entre otras cuestiones- el piso de los montos dinerarios a partir de los cuales son punibles algunas de las conductas consideradas delitos tributarios, los relativos a los recursos de la seguridad social y los fiscales comunes.

Sentado lo expuesto, a los fines de resolver la incidencia planteada, esto es en el caso de marras la evasión tributaria simple del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado, cobra relevancia lo normado por el artículo 2 del Código Penal en cuanto establece lo siguiente: *"Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho"*; así como también las normas internacionales incorporadas a nuestra CN (art. 9 CADH, art 15 TIDCP).

En ese sentido, cabe mencionar el fallo dictado por la Excma. CSJN que aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más benigna con motivo de la sanción de la Ley 26063 (por la



que se incrementó -en ese entonces- de cinco a diez mil pesos el monto contemplado por el artículo 9 de la Ley 24769) en la causa 330:4544 caratulada: *“Palero, Jorge Carlos s/ Recurso de Casación”*, en la que se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación que había expuesto: *“...resulta aplicable al caso en forma retroactiva la ley que ha resultado más benigna para el recurrente de acuerdo a lo normado por el artículo 2 del Código Penal, en tanto que la modificación introducida importó la desincriminación de aquellas retenciones mensuales menores a dicha cifra, entre las que se incluyen las que conformaron el marco fáctico original de la pena impuesta al apelante que, de ser mantenida, importaría vulnerar aquel principio receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”*.

Posteriormente, dicho criterio fue ratificado por el Alto Tribunal en el caso *“Vidal”* (del 28/10/2021, Fallo 344:2714), en el cual se reafirmó la vigencia del principio constitucional de la ley penal más benigna (art. 2 CP), y se sostuvo que los cambios en los montos de evasión implican una desincriminación de conductas, y no una mera actualización, con cita el precedente *“Palero”*, mencionado *ut supra*.

Trasladadas las consideraciones precedentes al *“sub lite”* cabe concluir que, en relación al hecho investigado en las presentes actuaciones, la Ley 27799 vigente en la actualidad, al elevar los montos dinerarios a partir de los cuales la conducta es considerada delictual, torna atípica la conducta investigada en autos, viniendo a ser más benigna para el imputado que la que se encontraba vigente al momento de los hechos -Ley 27430-, por lo que debe ser aplicada retroactivamente por imperio constitucional (cfr. art. 9 CADH, 15.1 PIDCyP, y 75, inc. 22, CN) y por las prescripciones legales pertinentes (cfr. art. 2 CP)², bajo el entendimiento de que la retroactividad de la

² CFCP: Sala I, FLP 115182/2018/3/CFC1 *“PAREDES, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación”* del 6/9/2021; Sala II, FBB 17789/2017/1/RH1 - CFC1 *“MADSEN CRISTIAN MIGUEL y otro s/ recurso de casación”* del 13/7/2021; Sala III, FMP 27907/2017/2/CFC2 *“Criado, Guillermo Federico s/recurso de casación”* del 22/12/2020; Sala IV, FRO 63978/2017/CFC1 *“Torres, Diego Germán y*



USO OFICIAL

norma se torna operativa no sólo a raíz de cambios en la conducta típica y la sanción penal, sino también de elementos que hacen a la conformación del hecho imputable, en este caso, a la condición objetiva de punibilidad.

Así, a la luz de la norma vigente en la actualidad que elevó el monto mínimo para la configuración del delito de evasión tributaria simple de \$1,5 millones a \$100 millones por cada tributo y por cada ejercicio anual, los hechos que pesan contra Fernando Esteban Giralt ya no pueden ser objeto de reproche penal por estricta aplicación de garantías de rango constitucional, por haber quedado fuera del ámbito de las evasiones penalmente punibles.

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Pública Oficial de Fernando Esteban Giralt a fs. 67/68 y, en consecuencia, revocar el auto de procesamiento de fecha 12/04/2025, y sobreseerlo por el delito de evasión tributaria simple por la suma de \$ 7.588.402,17, en concepto de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020, y por la suma de \$4.190.848,33, en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal 2020 (períodos fiscales 01/2020 a 12/2020) (art. 336, inc. 3, CPPN), haciendo declaración de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor que hubiere gozado el nombrado (art. 336, *in fine*, CPPN).

Por lo expuesto, **propongo al Acuerdo:** Se haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa pública oficial de Fernando Esteban Giralt a fs. 67/68 y, en consecuencia, se revoque el auto de procesamiento de fecha 12/04/2025, y sobreseerlo por el delito de evasión tributaria simple por la suma de \$7.588.402,17, en concepto de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020, y por la suma de \$4.190.848,33, en concepto de Impuesto al Valor Agregado

otros s/recurso de casación” del 6/7/2021.



por el ejercicio fiscal 2020 (períodos fiscales 01/2020 a 12/2020) (art. 336, inc. 3, CPPN), haciendo declaración de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor que hubiere gozado el nombrado (art. 336, *in fine*, CPPN).

La señora Jueza de Cámara, Silvia Mónica Fariña, dijo:

Por compartir sustancialmente las consideraciones formuladas en el voto que antecede, en las particulares circunstancias del caso, adhiero a la solución propuesta por el doctor Leandro Sergio Picado.

Por ello, **SE RESUELVE:** Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa pública oficial de Fernando Esteban Giralt a fs. 67/68 y, en consecuencia, revocar el auto de procesamiento de fecha 12/04/2025, y sobreseer por el delito de evasión tributaria simple por la suma de \$7.588.402,17, en concepto de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2020, y por la suma de \$4.190.848,33, en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio fiscal 2020 (períodos fiscales 01/2020 a 12/2020) (art. 336, inc. 3, CPPN), haciendo declaración de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor que hubiere gozado el nombrado (art. 336, *in fine*, CPPN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. No suscribe el señor Juez de Cámara, Pablo A. Candisano Mera (art. 3°, ley 23.482).

Leandro Sergio Picado

Silvia Mónica Fariña

Ante mí:

Guido M. Selvarolo Arcuri
Secretario de Cámara

amc

